

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL
MAGISTRADA PONENTE: MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	MARÍA ROSARIO SUÁREZ RUANO
DEMANDADO	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
LITISCONSORTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PROCEDENCIA	JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CTO DE MEDELLÍN
RADICADO	05001-31-05-004-2017-00355-01
SEGUNDA INSTANCIA	CONSULTA
TEMAS Y SUBTEMAS	REAJUSTE PENSIÓN JUBILACIÓN – Ley 4ª de 1976
DECISIÓN	REVOCA

SENTENCIA No. 091

Medellín, veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

En atención a lo previsto en el decreto 806 de 2020 convertido en legislación permanente a través de la Ley 2213 de 2022, una vez discutido y aprobado en la SALA TERCERA DE DECISION LABORAL el presente asunto, según consta en Acta No. 012_de 2023, se procede a dictar SENTENCIA en orden a resolver el GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA en favor de la **DEMANDANTE** respecto de la Sentencia del 23 de mayo de 2022, proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín.

ANTECEDENTES

La señora **MARÍA ROSARIO SUÁREZ RUANO** presentó demanda ordinaria laboral en contra la **UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA** con el fin de que: **1)** Se declare que tiene derecho al reajuste de la pensión de jubilación que percibe, a partir del año 2000, incrementando su mesada en un 15% anual. **2)** En consecuencia, solicitó condenar a la demandada a pagar en su favor las diferencias resultantes del reajuste de su pensión de jubilación, debidamente indexadas.

Sustentó sus pretensiones en que, estuvo vinculada como trabajadora oficial a la **UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA** desde el 9 de febrero de 1970 hasta el 7 de octubre de 1991, cuando egresó de la entidad para disfrutar de la pensión de jubilación convencional que le fuera reconocida por aquella a través de la *Resolución No. 4628 del 20 de noviembre de 1991*, efectiva a partir del 8 de octubre de 1991, la cual viene percibiendo con normalidad.

Que la Convención Colectiva de Trabajo suscrita el 23 de marzo de 1976 entre la demandada y el *Sindicato de Trabajadores Oficiales de la Universidad de Antioquia*, estableció en su artículo 15°, entre otras cosas, que daría cumplimiento a lo establecido en la Ley 4ª de 1976 para el personal pensionado por invalidez y de jubilación. Dicha norma, según dijo, contempló en su artículo 1° un reajuste anual de las pensiones descritas en los siguientes términos:

“(…) *Parágrafo Tercero. **En ningún caso** el reajuste de que trata este artículo será inferior al 15% de la respectiva mesada pensional, para las pensiones equivalentes hasta un valor de cinco (5) veces al salario mensual mínimo legal más alto. (…)*”.

En ese sentido, señaló que para el momento en que le fue reconocida la pensión de jubilación por parte de la Universidad, estaba vigente el artículo 15 de la Convención mencionada, la cual no ha sido derogada, modificada, anulada o sustituida por acuerdos convencionales posteriores.

Que la accionada ha cumplido de manera parcial lo consagrado en el articulado convencional reseñado, por cuanto no ha efectuado el aumento de la mesada, fijado en el 15%, pese a que la prestación no ha superado el equivalente a cinco (5) SMLMV, en tanto su pensión ha sido aumentada anualmente con base en la variación del IPC, porcentaje que desde el año 2000 ha sido inferior al 15% comentado, lo que genera un déficit en su pensión.

Que en virtud de lo anterior, el 26 de septiembre de 2012, formuló reclamación administrativa ante la **UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA** en procura de obtener la reliquidación de su mesada, petición resuelta de manera negativa a través de *Resolución N°604 del 3 de octubre de 2012*, tras considerar que lo presupuestado en la disposición convencional se refiere a prestaciones extralegales y no a reajustes pensionales, decisión confirmada en *Resoluciones N° 041 del 18 de febrero de 2013 y N° 36933 del 19 de abril de 2013* (f. 1 a 17 Archivo 01 ED).

POSICIÓN DE LA ACCIONADA

La demandada **UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA** dio contestación al gestor, oponiéndose a las pretensiones de la demanda, manifestando que, si bien es cierto lo anotado respecto del artículo 15 de la CCT, en cuanto a la remisión que hace a la Ley 4ª de 1976, esto obedece a que se trataba de la norma que se hallaba vigente en materia de pensiones en el sector público, para el momento de la suscripción de la convención, sin disponer que su aplicación perviviría para los beneficiarios del citado texto convencional, tanto que estipuló una relación directa entre esta y la vigencia de la norma general.

En ese contexto precisó que, el sentido atribuido al articulado no fue el de reconocer indefinidamente y sin consideración a su vigencia, los derechos estipulados en la citada normativa, entendiéndose que la remisión a la preceptiva descrita se dirige a aquella, o a la que disponga su posterior modificación o sustitución, como en efecto aconteció con la Ley 71 de 1988 y posteriormente la Ley 100 de 1993.

En consonancia con lo anotado, propuso las excepciones de: “(…) *FALTA DE CAUSA PARA PEDIR: INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE INCREMENTO DEL 15% A CARGO DE LA UNIVERSIDAD; BUENA FE DE LA UNIVERSIDAD y PRESCRIPCIÓN (…)*” (f. 522 a 541 Archivo 01 ED).

En audiencia del 18 de agosto de 2018, al resolver la excepción previa propuesta por la demandada, el Juzgado de primer grado dispuso la vinculación al proceso en calidad de *Litisconsorte Necesario*, del **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**, entidad que concurrió al proceso resistiendo las pretensiones, bajo la idea de no haber sido quien otorgó la pensión de jubilación a la demandante. Propuso los exceptivos de: “(…) *FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA y PRESCRIPCIÓN (…)*” (f. 580 a 582 y 596 a 611 Archivo 01 ED).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Surtido el trámite de primera instancia, mediante la Sentencia del 23 de mayo de 2022, el *Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín*, decidió absolver a la

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y el **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** de las pretensiones incoadas en la demanda por la señora **MARÍA ROSARIO SUÁREZ RUANO**, a quien condenó en costas procesales.

Para arribar a esta decisión, el Juzgado de primer grado comenzó por recordar que las CCT son consideradas fuente de derechos, y como tal, deben interpretarse conforme los textos legales, citando en este escenario lo discurrido en Sentencias SL14064-2016, SL5132-2017 y SL351-2018, entre otros pronunciamientos, a fin de aclarar que la facultad interpretativa no tiene cabida cuando el texto convencional es diáfano, y que es posible aplicar el principio de favorabilidad, siempre y cuando haya más de una norma vigente y regule la misma situación.

En ese sentido, afirmó respecto del contenido del artículo 15 de la CCT 1976-1977, suscrita entre la demandada y el Sindicato de Trabajadores Oficiales de esta entidad, en concordancia con el parágrafo 3° del artículo 1° de la Ley 4ª de 1976, que no es viable aplicar la favorabilidad predicada solicitada, en la medida en que no se advierte duda alguna, que genere la necesidad de hacer una interpretación sistémica; máxime que el tema no fue ni siquiera contemplado en las Convenciones de 1981, 1983, 1985 y 1991 a 1993, y tampoco en el laudo arbitral aportado como anexo a la demanda; es decir, no estipuló el deseo de las partes de aplicar la ley en comento, sin que haya lugar a tener en cuenta el precedente citado por el extremo demandante, el cual se vale de una convención colectiva distinta a la estudiada en el asunto.

Seguidamente expuso que, el artículo 1° de la Ley 4ª de 1976 fue sustituido por Ley 71 de 1988, que modificó la forma como venían liquidándose las pensiones, reglando que la actualización anual sería de oficio y con base en el porcentaje fijado para el salario mínimo, argumentos reforzados con lo analizado en la Sentencia C-110 de 2006, para añadir que, con la expedición de la Ley 100 de 1993, la pensiones se reajustan en los términos del artículo 14, y de acuerdo con el IPC certificado por el DANE para el año anterior, lo que significa que la Ley 4ª de 1976 no era aplicable.

Por último, expresó que, en Sentencia C-387 de 1994, se dijo con respecto al reajuste anual de los pensionados, que no tienen un derecho adquirido, sino una mera expectativa, siendo viable acudir al reajuste de las pensiones consagrado en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, incluso para los pensionados con anterioridad a esta norma.

GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA

En atención a que no se interpuso recurso alguno en contra de la sentencia de primera instancia, el presente asunto se estudiará en virtud del GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA a favor de la parte **DEMANDANTE**, conforme lo dispone el artículo 69 del CPTSS.

ALEGATOS DE CONCLUSION

Dentro del término otorgado, la apoderada judicial de la parte **DEMANDANTE** alegó manifestando que, al tratarse de una discusión de puro derecho, su posición aparece respaldada en pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral de la CSJ como el contenido en la Sentencia SL4555-2020 y SL2845-2021, al igual que en decisiones en las cuales se estudiaron procesos similares al asunto bajo estudio, concluyendo que el clausulado convencional del cual se reclama su aplicación, permanece vigente y obliga a las partes (Sentencias SL3431-2021), por lo que solicita la revocatoria de la decisión de primer grado (Archivo 05 ED Tribunal).

De otro lado, el mandatario de la **UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA** solicitó la confirmación de la sentencia, blandiendo, en primera medida, que en el proceso no se probó el depósito de la CCT, conforme lo establecido en el artículo 469 CST.

En segundo término, reiteró la postura sostenida desde la contestación a la demanda, relativa a que la Ley 4ª de 1976 no quedó incorporada en la Convención 1976-1977, añadiendo que, en los casos en los cuales la Jurisprudencia ha autorizado la posibilidad de aplicar la citada normativa, aun después de haber sido derogada, se ha supeditado esta conclusión a que ello resulte claro de la voluntad de las partes (SL1184-2018), lo cual no ocurre en el presente proceso, como quiera que el contenido del artículo 15 CCT 1976-1977, se encamina a la aplicación de la norma vigente para ese momento, sin establecerse que los efectos de esta normativa pervivirían para los beneficiarios de la convención de manera indefinida, por lo que la remisión a que se hace alusión debía cumplir con lo establecido en la normativa general vigente, que posteriormente pasó a regularse por la Ley 71 de 1988 y luego en la Ley 100 de 1993.

Así mismo, alegó que la Ley 4ª de 1976 no aplicaría para el caso de la demandante porque para el momento de la suscripción de la CCT, aquella no tenía el *status* de pensionada, máxime cuando los reajustes pensionales a la fecha se encuentran regulados por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, argumentos reforzados con base en el Acto Legislativo 01 de 2005 y lo considerado en pronunciamientos jurisprudenciales de la Sala de Casación Laboral de la CSJ. Por último, señaló que, de revocarse la decisión inicial, se tenga en cuenta el principio de sostenibilidad financiera al tenor del artículo 48 CN y sentencias como la T-334 de 2021 (Archivo 04 ED Tribunal).

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico que ocupa la atención de la Sala gravita en establecer si le asiste derecho a la señora **MARÍA ROSARIO SUÁREZ RUANO** al reajuste de la pensión de jubilación reconocida por la **UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA**, conforme lo establecido en el artículo 15 de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977, en concordancia con el artículo 1º de la Ley 4ª de 1976.

De ser así, se establecerá el valor de las diferencias generadas, previo estudio de la excepción de prescripción formulada por la pasiva, y si procede ordenar la indexación de las sumas resultantes.

Se dispone entonces la Sala a resolver los planteamientos, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Como supuestos de hecho debidamente demostrados en el *sub-lite* se tienen los siguientes:

- (i) Que mediante *Resolución Administrativa N° 4628 del 20 de noviembre de 1991*, la **UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA** reconoció a la señora **MARÍA ROSARIO SUÁREZ RUANO**, pensión de jubilación convencional, a partir del **8 de octubre de 1991**, en cuantía mensual de \$125.708,27, en atención a lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977 (f. 75 a 78 Archivo 03 ED).
- (ii) Que el **23 de septiembre de 2012** la demandante solicitó a la **UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA** el reajuste de su pensión convencional, desde el año 2000, con base en el 15%, según lo dispuesto en la Ley 4ª de 1976, o en subsidio, se aplique lo consagrado en la Ley 71 de 1988 o la Ley 100 de 1993.

- (iii) La citada petición fue negada por la accionada en *Resolución Administrativa No. 604 del 3 de octubre de 2012*, decisión confirmada en las Resoluciones *Nº 041 del 18 de febrero de 2013* y *Nº 36933 del 19 de abril de 2013* (f. 127 a 137 Archivo 03 ED).

DEL REAJUSTE DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN

La controversia trazada desde la demanda orbita en torno al reajuste pensional solicitado por la señora **MARÍA ROSARIO SUÁREZ RUANO**, pretensión sustentada en el contenido del artículo 15 de la CCT 1976-1977 suscrita entre la **UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA** y el **Sindicato de Trabajadores Oficiales** de esta entidad, disposición que a su vez contiene una remisión a las preceptivas de la Ley 4ª de 1976, en virtud de la cual la actora pregonaba que su pensión de jubilación es susceptible de incrementarse en un 15%, según lo reglado en el parágrafo 3º del artículo 1º de dicha estipulación legal.

La solución asumida para el conflicto por el Juez de primera instancia, se orientó hacia la improcedencia de los pedimentos, tras concluir que, en su criterio, además de no haber dubitación alguna acerca del alcance del texto convencional mentado, tampoco se contempló por las partes en acuerdos posteriores, la intención de continuar aplicando el contenido de la Ley 4ª de 1976, a lo que se suma que lo dispuesto en esta ley, fue luego subrogado por la Ley 71 de 1988 y más adelante por la Ley 100 de 1993, resaltando precisamente que en la actualidad, las pensiones se reajustan al tenor de lo señalado en el artículo 14 de la última disposición legal citada.

Puestas de ese modo las cosas, para desatar la disyuntiva, lo primero que debe destacar la Sala es que no hay discusión sobre la condición de la demandante de destinataria de la CCT 1976-1977, por cuanto desde la misma resolución de reconocimiento de la pensión de jubilación se indicó expresamente que, por reunir las condiciones exigidas en el citado acuerdo, se tuvo a la actora como beneficiaria de la prestación pensional reglada allí, cuestión que se reitera en los actos administrativos a través de los cuales la demandada dio respuesta a la reclamación de reajuste pensional (f. 75 a 77 y 127 a 137 Archivo 03 ED).

Así mismo, en consonancia con el tema debatido, resulta pertinente precisar que a folios 70 a 82 Archivo 01 ED, reposa copia de la Convención Colectiva suscrita al interior de la **UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA** para la vigencia 1976-1977, con la respectiva nota de depósito, por lo que, contrario a lo alegado por el apoderado de la Universidad, su contenido tiene pleno valor probatorio, conforme lo dispuesto de antaño por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencias como la SL378-2018 del 24 de enero de 2018.

Esgrimido lo anterior, de cara a la resolución de este asunto, cumple anotar que, justamente, la CCT 1976-1977 establece en su artículo 15º, contentivo de los beneficios extralegales para los pensionados, lo siguiente:

“(…) A partir de la vigencia de la presente convención, la universidad reconocerá a los trabajadores pensionados por invalidez y jubilación, el subsidio familiar, se beneficiarán de la distribución de los remanentes de que trata la convención de 1975 en el capítulo quinto; el servicio médico familiar de que trata el capítulo quinto de esta convención, las primas de junio y navidad; los auxilios por maternidad, entierro, útiles escolares, y para estudio becas. Igualmente, la universidad dará cumplimiento a la ley 4 de enero 21 de 1976 para las personas de pensionados por invalidez y jubilación. (…)” (Subraya y Negrilla de la Sala)

En armonía con ello, la Ley 4ª de 1976 contemplaba:

*“(…) **ARTÍCULO 1º.-** Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y en el sector privado, así como*

las que paga el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales a excepción de las pensiones por incapacidad permanente parcial, se reajustarán de oficio, cada año, en la siguiente forma:

(...)

PARÁGRAFO 3°.- En ningún caso el reajuste de que trata este Artículo será inferior al 15% de la respectiva mesada pensional, para las pensiones equivalentes hasta un valor de cinco veces el salario mensual mínimo legal más alto. (...)” (Subraya y Negrilla de la Sala).

Nótese entonces que, desde el mismo clausulado convencional se efectúa, en beneficio de los pensionados de la entidad, la remisión al contenido de la Ley 4ª de 1976, condición que, a voces de la Jurisprudencia, no se modifica por el hecho de que tal disposición hubiere sido sustituida o derogada posteriormente por contenidos normativos posteriores, a saber, la Ley 71 de 1988 o la Ley 100 de 1993, ya que, al haber sido incorporada al texto de la convención, adquirió tal naturaleza, a saber, la de norma convencional.

Justo en estos términos lo dio a entender el Máximo Tribunal Laboral y de la Seguridad Social en la Sentencia proferida dentro del Rad. 40551 el 25 de octubre de 2011 en la que dijo: “(...) *No hay regla de derecho que impida que el empleador y el sindicato acuerden reproducir en el convenio colectivo de trabajo, el contenido de una norma legal que conservara vigencia como norma convencional así aquella esta sea posteriormente derogada, pues desde el pacto entra a formar parte de los contratos de trabajo de cada uno de las personas que se benefician de la convención en los términos del artículo 467 del código sustantivo de trabajo. (...)”*.

En igual sentido importa anotar que, en cuanto a la interpretación de las cláusulas convencionales, la Corte Suprema de Justicia varió su jurisprudencia entendiendo que la Convención Colectiva comporta una fente jurídica de derechos, cuyo contenido normativo como cualquier otro dispositivo legal que rige las relaciones de las partes, admite la aplicación de principios y reglas de interpretación propias del derecho laboral, así como una interpretación conforme a la Constitución Política y, dada su naturaleza de norma consensuada, contractual y autorreguladora, ceñida al espíritu de las disposiciones y la intención y expectativas de los contratantes; de ahí que su alcance y contenido deba aquilatarse con tales principios tuitivos del derecho social. En este sentido expuso en sentencia SL4105-2020 que:

“Sin embargo, en decisiones recientes, la Corporación ha reorientado esta postura para reivindicar el valor esencialmente normativo de dichos instrumentos colectivos y reconocer que al interpretarlos pueden aflorar varias lecturas que generen dudas en cuanto a su contenido, significado y alcance, de modo que de avalarlas todas en el mundo casacional puede comprometer garantías superiores como la seguridad jurídica, la coherencia del orden jurídico y el derecho a la igualdad de los usuarios de la administración de justicia.

En esa dirección, ha decidido que ante tales dualidades deben sentarse criterios unívocos a fin de evitar la pluralidad de interpretaciones de cláusulas extralegales en casos similares. Así, la Corporación ha incluido como parámetros de valoración de estas fuentes jurídicas el respeto a los derechos fundamentales y la pertinencia de reglas de interpretación vigentes y aplicables a cualquier norma de carácter laboral, entre ellas la de favorabilidad ante varios criterios razonables, interpretación conforme a la Constitución Política y, por su naturaleza de norma voluntaria, contractual y autorreguladora, el espíritu de las disposiciones y la intención y expectativas de los contratantes (CSJ SL351-2018 y CSJ SL5052-2018). (Subrayas fuera de texto).

Y fue en el marco de esa actividad intelectual que observa la Sala, sobre el preciso tema que nos ocupa, que el Alto Tribunal emitió pronunciamientos reiterados y recientes, desentrañando la real intención de los contrayentes del acuerdo suscrito entre el sindicato y la aquí demandada (SL1149-2022, SL1696-2022, SL1731-2022, SL1745-2022, entre otras), en los que coligió que del contenido del artículo 15° de la CCT no era dable extraer que su

aplicación estaba ligada a la mera vigencia de la Ley 4ª de 1976, en tanto esta última quedó incorporada en el texto convencional, erigiéndose entonces, como fuente normativa del referido convenio. Al efecto, en Sentencia SL1149-2022 indicó:

“(…) Así las cosas, a juicio de la Sala, la lectura efectuada por el Tribunal respecto de la cláusula decimoquinta convencional se exhibe desatinada, pues tal estipulación guarda correspondencia con la teleología de la negociación colectiva, de procurar el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, en este caso, al permitir que los pensionados de la Universidad al igual que quienes lleguen a pensionarse, accedan a las prerrogativas de la Ley 4ª de 1976, sin que se observe que la intención de los contratantes hubiera sido la de supeditar el disfrute de los beneficios en ella dispuestos, mientras estuviera vigente”.

(…)

“Entonces, contrario a lo aducido por el Tribunal y alegado por la opositora, el hecho de que en la citada cláusula no se hiciera alusión alguna sobre la vigencia de la norma legal de referencia, en manera alguna podía conducir a concluir que la misma estuviera atada a la derogatoria, subrogatoria o demás situaciones que afectan la vigencia de la ley en el tiempo, en este caso, de la citada Ley 4ª de 1976, por ser claro que, incorporada la norma legal al texto convencional, ésta queda sujeta, no a las accidentalidades que afectan su lugar de origen, que no es más que un marco de referencia, se repite, sino a las propias de la vigencia de las preceptivas convencionales, pues deja de ser norma legal para los convencionalistas, para convertirse en norma convencional propia de sus relaciones contractuales de trabajo. Este es el cabal entendimiento que debe darse a la vigencia de la norma convencional cuando su contenido tiene venero o fuente en una norma legal, como ocurre en este caso (…)”. (Negrillas y subrayas fuera de texto).

En esa senda resáltese que, en Sentencia SL579-2023 se anotó que el incremento petitionado se constituía en un verdadero derecho adquirido por el hecho de haberse pensionado con base en la citada convención. Así lo precisó:

“(…) Finalmente, cumple acotar que los incrementos pretendidos por la recurrente constituyen verdaderos derechos adquiridos, pues se encuentra pensionada desde el año 1992, a través de la Resolución n.º 6398 del 20 de octubre de 1992 (folios 83 a 85), con venero en la Convención Colectiva de Trabajo 1976 – 1977 y, como quedó visto, a pesar de la derogatoria de la Ley 4ª de 1976, lo cierto es que esta siguió rigiendo dichos beneficios por virtud de lo instituido en el plurimencionado acuerdo colectivo.

De esta manera, fluye con claridad, la innegable conclusión relativa a la existencia de un derecho adquirido a favor de la accionante, dada la fecha en que se causó su pensión de jubilación -1992-, el que, atendiendo la correcta interpretación de la cláusula convencional precitada, debe serle garantizado, sin que resulte admisible ninguna lectura diferente. (…)”.

Quiere decir lo anterior que, desde la comprensión dada por la Jurisprudencia al texto extralegal analizado, se colige que fue la voluntad de las partes inmiscuidas en el conflicto laboral, establecer para los jubilados un reajuste no inferior al 15%, pues nótese, que en parte alguna quedó precisada la intención de atar el disfrute de los beneficios estipulados allí, a la vigencia de la Ley 4ª de 1976; por lo contrario, lo contemplado en el convenio se interpretó como una incorporación de la disposición en comentario al texto convencional, quedando de ese modo positivizado el reajuste contenido en el precepto legal en dicho acuerdo, y blindada frente a los avatares que los desarrollos legislativos futuros le pudieran acarrear.

Puestas de ese modo las cosas, atendiendo al precedente vertical pacífico sobre la materia, contrario a lo sostenido por el Juez de primer grado, e incluso a la postura que venía sosteniendo esta Corporación, la cual se recoge, a efectos de entender que la CCT 1976-1977 incorporó a su clausulado el contenido de la Ley 4ª de 1976 como fuente normativa independiente, condición que le permite mantener su vigencia en casos como el estudiado, pese a su derogatoria posterior, asistiéndole derecho a la demandante al reajuste económico

reivindicado, por lo que habrá de revocarse la decisión, para en su lugar, acceder a la pretensión reliquidatoria.

Ante esa conclusión, se tiene que a través de *Resolución N° 4628 del 20 de noviembre de 1991* a la señora **SUÁREZ RUANO** le fue reconocida por parte de la **UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA** la pensión de jubilación convencional a partir del 8 de octubre de 1991, en cuantía de \$125.708,27, prestación que, como se observa, no resultaba superior a la suma equivalente a cinco (5) SMLMV de la época, única condición que limitaba el reajuste en los términos anotados (f. 75 a 78 Archivo 03 ED).

Ahora bien, es del caso precisar que, desde la contestación a la demanda la **UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA** aceptó que anualmente aplica el reajuste de la pensión de jubilación, conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, siendo claro así como el incremento de la mesada pensional, por lo menos a partir del año 2000¹, se viene efectuando en un porcentaje inferior al 15%.

Bajo esas condiciones, y antes de entrar a realizar los cálculos respectivos a efectos de verificar la existencia de diferencias en favor de la actora, debe la Sala estudiar la excepción de prescripción propuesta por la entidad demandada, con fundamento en el artículo 151 del CPTSS.

En ese sentido se tiene que, una vez reconocida la pensión de jubilación a la actora en la *Resolución 4628 del 20 de noviembre de 1991*, posteriormente, el **23 de septiembre de 2012**, la demandante **SUÁREZ RUANO** reclamó a la Universidad el reajuste de su pensión, petición negada en *Resolución Administrativa No. 604 del 3 de octubre de 2012*, confirmada en las *Resoluciones No. 041 del 18 de febrero de 2013* y *No. 36933 del 19 de abril de 2013*, notificada esta última el **19 de septiembre de 2013** (f. 127 a 137 Archivo 03 ED), mientras que la demanda originaria del presente proceso fue radicada el **7 de abril de 2017** (f. 17 Archivo 01 ED).

Lo anterior muestra que, entre la fecha de notificación del acto administrativo que resolvió el recurso de apelación formulado por la actora en contra de la resolución que negó la reclamación de reajuste impetrada por la actora, y la presentación de la demanda, transcurrió más del trienio requerido para la operatividad de la figura extintiva analizada, por lo que es dable considerar que están afectadas por prescripción extintiva las diferencias causadas antes del **7 de abril de 2014**.

Esgrimido lo anterior, en el certificado vertido en el Archivo 02 ED, se encuentra registro del valor de las mesadas canceladas por la entidad en favor de la demandante, a partir del año 2000, por concepto de su pensión de jubilación (Anexo 1° Cuadro No. 1), las cuales, al reajustarse de acuerdo con la norma convencional, arroja del 2000 al 2023 los siguientes valores:

¹ Variación anual índice de precios al consumidor 1992 a 2022

AÑO	IPC	AÑO	IPC	AÑO	IPC	AÑO	IPC
1992	26,82	2000	8,75	2008	7,67	2016	5,75
1993	25,13	2001	7,65	2009	2	2017	4,09
1994	21,09	2002	6,99	2010	3,17	2018	3,18
1995	22,59	2003	6,49	2011	3,73	2019	3,8
1996	19,46	2004	5,5	2012	2,44	2020	1,61
1997	21,63	2005	4,85	2013	1,94	2021	5,62
1998	17,68	2006	4,48	2014	3,66	2022	13,12
1999	16,7	2007	5,69	2015	6,77		

CUADRO CALCULO REAJUSTES CONVENCIONALES

AÑO	VALOR MESADA ACTUAL	SLMMV	CINCO (5) SMLMV	IPC	VALOR MESADA REAJUSTE CONVENCIONAL	INCREMENTO PENSION DEMANDANTE
2000	\$ 649.147	\$ 260.100	\$ 1.300.500		\$ 683.438	0,15
2001	\$ 705.948	\$ 286.000	\$ 1.430.000		\$ 785.954	0,15
2002	\$ 759.952	\$ 309.000	\$ 1.545.000		\$ 903.847	0,15
2003	\$ 813.073	\$ 332.000	\$ 1.660.000		\$ 1.039.424	0,15
2004	\$ 865.841	\$ 358.000	\$ 1.790.000		\$ 1.195.337	0,15
2005	\$ 913.463	\$ 381.500	\$ 1.907.500		\$ 1.374.638	0,15
2006	\$ 957.767	\$ 408.000	\$ 2.040.000		\$ 1.580.834	0,15
2007	\$ 1.000.675	\$ 433.700	\$ 2.168.500		\$ 1.817.959	0,15
2008	\$ 1.057.614	\$ 461.500	\$ 2.307.500		\$ 2.090.652	0,15
2009	\$ 1.138.733	\$ 496.900	\$ 2.484.500		\$ 2.404.250	0,15
2010	\$ 1.161.508	\$ 515.000	\$ 2.575.000	0,0317	\$ 2.764.888	IPC
2011	\$ 1.198.328	\$ 535.600	\$ 2.678.000	0,0373	\$ 2.852.535	IPC
2012	\$ 1.243.026	\$ 566.700	\$ 2.833.500	0,0244	\$ 2.958.934	IPC
2013	\$ 1.273.356	\$ 589.500	\$ 2.947.500	0,0194	\$ 3.031.132	IPC
2014	\$ 1.298.060	\$ 616.000	\$ 3.080.000	0,0366	\$ 3.089.936	IPC
2015	\$ 1.345.569	\$ 644.350	\$ 3.221.750	0,0677	\$ 3.203.028	0,15
2016	\$ 1.436.665	\$ 689.455	\$ 3.447.275	0,0575	\$ 3.683.482	IPC
2017	\$ 1.519.274	\$ 737.717	\$ 3.688.585	0,0409	\$ 3.895.282	IPC
2018	\$ 1.581.413	\$ 781.242	\$ 3.906.210	0,0318	\$ 4.054.600	IPC
2019	\$ 1.631.702	\$ 828.116	\$ 4.140.580	0,038	\$ 4.183.536	IPC
2020	\$ 1.693.707	\$ 877.803	\$ 4.389.015	0,0161	\$ 4.342.510	0,15
2021	\$ 1.720.975	\$ 908.526	\$ 4.542.630	0,0562	\$ 4.993.887	IPC
2022	\$ 1.817.694	\$ 1.000.000	\$ 5.000.000	0,1312	\$ 5.274.543	IPC
2023	\$ 2.056.176	\$ 1.160.000	\$ 5.800.000	1	\$ 5.966.563	IPC

Cabe recordar que, el parágrafo 3° del artículo 1° de la Ley 4ª de 1976 – incorporado como viene señalándose al texto convencional - dispone que: “*En ningún caso el reajuste de que trata este artículo será inferior al 15% de la respectiva mesada pensional, para las pensiones equivalentes hasta un valor de cinco veces el salario mensual mínimo legal más alto*”, lo que se ha interpretado, *contrario sensu*, que cuando las pensiones superasen el tope señalado (5 SMLMV), no tendría aplicación tal reajuste, sino el legal, situación que acontece en el particular, a partir del año 2010, en que la mesada del actor durante varias anualidades supera ese tope, debiendo aplicarse para el periodo subsiguiente respecto de la mesada correspondiente a dichas anualidades, el ajuste de la norma general vigente, este es, el de la variación anual del índice de precios al consumidor certificado por el DANE (artículo 14 ley 100 de 1993), y retomando el reajuste del 15% cuando la pensión quedare por debajo del tope de los 5 SMLMV, como se muestra en el cuadro anterior (resalto verde).

Hechas las anteriores precisiones, de acuerdo con el contraste de sumas entre lo pagado por la entidad demandada y lo calculado en este proceso, se observa que a la demandante se le adeuda por concepto de retroactivo por las diferencias pensionales la suma de **\$323.457.589**, causadas entre el **7 de abril de 2014 y el 31 de marzo de 2023**, según se detalla en el cuadro subsiguiente, valor a cargo de la demandada, del cual se le autoriza efectuar los descuentos para las cotizaciones al sistema general de seguridad social en salud respecto de las diferencias calculadas –artículos 143 y 157 Ley 100 de 1993-.

AÑO	MESADA PAGADA	MESADA CONVENCIONAL	DIFERENCIA ADEUDADA	NUMERO MESADAS	TOTALES POR AÑO
2014	\$1.298.060	\$3.089.936,35	\$1.791.876,35	10,24	\$19.352.264,58
2015	\$1.345.569	\$3.203.028,02	\$1.857.459,02	14	\$26.004.426,29
2016	\$1.436.665	\$3.683.482,22	\$2.246.817,22	14	\$31.455.441,13
2017	\$1.519.274	\$3.895.282,45	\$2.376.008,45	14	\$33.264.118,32
2018	\$1.581.413	\$4.054.599,50	\$2.473.186,50	14	\$34.624.611,06
2019	\$1.631.702	\$4.183.535,77	\$2.551.833,77	14	\$35.725.672,75
2020	\$1.693.707	\$4.342.510,13	\$2.648.803,13	14	\$37.083.243,78
2021	\$1.720.975	\$4.993.886,65	\$3.272.911,65	14	\$45.820.763,05
2022	\$1.817.694	\$5.274.543,08	\$3.456.849,08	14	\$48.395.887,06
2023	\$2.056.176	\$5.966.563,13	\$3.910.387,13	3	\$11.731.161,38
TOTAL RETROACTIVO					\$323.457.589,42

La **UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA** deberá continuar pagando como mesada pensional a partir del 01 de abril de 2023, la suma de **\$5.966.563**.

De otro lado, como el valor del retroactivo de la diferencia pensional que ha debido recibir la demandante de tiempo atrás, se ve afectado por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, procede ordenar a la demandada que reconozca y pague la indexación de las sumas liquidadas, mes a mes, por el periodo de causación de cada diferencia.

En cuanto a la responsabilidad del **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**, basta con señalar que no se observa obligación pensional de ningún tipo en favor de la señora **MARÍA ROSARIO SUÁREZ RUANO**. No obstante, conforme se extracta de la resolución de reconocimiento pensional, la Universidad demandada efectuó el otorgamiento de la pensión a su beneficiaria teniendo en cuenta un tiempo de servicios a cargo del ente territorial, caso en el cual, conviene recordar, la pagadora de la prestación cuenta con las herramientas jurídicas establecidas en el ordenamiento para el recaudo de la respectiva cuota parte requerida para la financiación de la jubilación que viene cancelando a la accionante (SL669-2022 y SL1555-2022).

Todo lo anterior lleva a revocar la decisión de primera instancia, para en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda. Las costas de ambas instancias están a cargo de la **UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA**, debiendo incluir como agencias de esta sede la suma equivalente a dos (2) SMLMV.

Sin que sean necesarias más consideraciones, la **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

REVOCAR la Sentencia del 23 de mayo de 2022, proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, para en su lugar:

PRIMERO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de **PRESCRIPCIÓN** propuesta por la **UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA** respecto de las diferencias pensionales causadas con antelación al **7 de abril de 2014**.

SEGUNDO: DECLARAR que la señora **MARÍA ROSARIO SUÁREZ RUANO** tiene derecho al reajuste de la pensión de jubilación convencional a cargo de la **UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA**, en los términos establecidos en la Ley 4ª de 1976, incorporada en la convención colectiva de trabajo 1976-1977.

TERCERO: CONDENAR a la **UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA** a reconocer y pagar en favor de la señora **MARÍA ROSARIO SUÁREZ RUANO** la suma **\$323.457.589**, por concepto de retroactivo de las diferencias pensionales causadas del 7 de abril de 2014 hasta el 31 de marzo de 2023.

La demandada deberá continuar pagando como mesada a partir del 1 de abril de 2023 la suma de **\$5.966.564**, sin perjuicio de los incrementos anuales decretados por el Gobierno Nacional, o el convencional, cuando la mesada se sitúe por debajo de cinco (5) SMLMV.

CUARTO: AUTORIZAR a la **UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA** para que, del retroactivo a pagar a la demandante, descuente la parte correspondiente a los aportes con destino al SGSSS.

QUINTO: CONDENAR a la **UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA** a pagar las sumas adeudadas a la demandante, debidamente indexadas, mes a mes, desde su causación hasta el momento efectivo del pago.

SEXTO: Las costas de ambas instancias están a cargo de la **UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA**, incluyendo como agencias de esta sede la suma equivalente a dos (2) SMLMV.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA

MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA